Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares y tratados internacionales sobre cooperación judicial internacional

*José Antonio Briceño Laborí**

AMDIPC, 2025, No. 7, pp. 261-270.

Resumen

Mediante el presente artículo se aborda los posibles efectos que tiene la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares sobre la aplicación de los tratados internacionales sobre cooperación judicial internacional. Para ello se considera especialmente el artículo 63 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados como fuente para una solución razonable sobre este aspecto.

Abstract

This article addresses the possible effects of the severance of diplomatic or consular relations on the application of international treaties on international judicial cooperation. For this purpose, article 63 of the Vienna Convention on the Law of Treaties is considered in particular as a source of a reasonable solution in this regard.

Palabras clave

Relaciones diplomáticas. Relaciones consulares. Cooperación judicial internacional. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Derecho al acceso a la justicia.

Keywords

Diplomatic relations. Consular relations. International judicial cooperation. Vienna Convention on the Law of Treaties. Right of access to justice.

Sumario

Planteamiento del problema. I. La ausencia de regulación en los tratados de cooperación judicial internacional. II. La solución del artículo 63 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. III. El problema planteado a la luz del artículo 63 de la Convención de Viena. Conclusión.

Planteamiento del problema

Alicia ha presentado una demanda contra Roberto por cumplimiento de contrato. La misma está siendo conocida por los tribunales del país de domicilio de Alicia. Dentro de su escrito de demanda Alicia expresó que Roberto estaba domiciliado en un país distinto al de ella y, por ende, distinto al de los tribunales ante los cuales presentó la demanda. En virtud de ello, Alicia incluyó en su escrito de demanda una petición para que fuese librada una solicitud de notificación en el extranjero con el fin de que los tribunales del país del domicilio de Roberto materializaran su citación, a la luz de lo previsto en el Convenio relativo a la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial del 15 de noviembre de 1965. Si bien el tribunal admitió la demanda, mediante una decisión interlocutoria declaró la improcedencia de la solicitud de notificación en el extranjero por cuanto, en el año anterior a la presentación de la demanda, hubo una ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares entre el país del foro y el país del domicilio de Roberto. Por tal

* Abogado, Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, UCV, profesor de Derecho internacional privado UCV y UCAB, Secretario de Redacción del Anuario.

razón, el tribunal indicó que la solicitud de notificación en el extranjero era de imposible ejecución. Alicia apeló de tal decisión en virtud del gravamen que le causó la declaratoria de improcedencia de la notificación en el extranjero.

En este breve trabajo nos proponemos abordar el efecto que tiene la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares sobre la operación de los mecanismos de cooperación judicial internacional. Concretamente, la interrogante a la que nos queremos aproximar reside en si la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares exime a los Estados parte de un tratado de cooperación judicial internacional de cumplir con las obligaciones derivadas de dicho instrumento. Para ello abordaremos primeramente la ausencia de regulación específica en los tratados internacionales de cooperación (I), para luego aproximarnos a una regulación a partir de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (II), finalizando con unas consideraciones del tema a la luz de los principios que influyen (o deberían influir) en los mecanismos de cooperación judicial internacional (III).

I. La ausencia de regulación en los tratados de cooperación judicial internacional

De la revisión de los acuerdos internacionales en materia de cooperación judicial internacional que han sido suscritos a nivel universal, en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado¹ y a nivel regional, en el marco de las Conferencias Especializadas sobre Internacional Privado (CIDIP) auspiciadas por la Organización de Estados

¹ (I) Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, adoptado el 15 de noviembre de 1965. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por ochenta y cuatro países. Entre estos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 29 de octubre de 1993 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 28 del tratado, el 1º de julio de 1994. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/DlnzIt> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/Hnqk6E> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (II) Convenio de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, adoptado el 15 de noviembre de 1965. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por ochenta y cuatro países. Entre estos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 29 de octubre de 1993 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 28 del tratado, el 1º de julio de 1994. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/DlnzIt> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/Hnqk6E> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (III) Convenio para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, adoptado el 25 de octubre de 1980. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por veintiocho países. Venezuela publicó la Ley Aprobatoria respecto de este tratado en Gaceta Oficial No. 6.186 Extraordinario del 09 de junio de 2015. No obstante, no ha sido ratificado a la presente fecha. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/qNd3fo> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/Zq145S> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (III) Convenio sobre Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, adoptado el 23 de noviembre de 2007. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por cincuenta y cuatro países, entre los cuales no se encuentra Venezuela. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/UjfiSK> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/SI2TfC> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025).

Americanos (OEA)² y en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)³ se evidencia que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares y sus efectos sobre las obligaciones asumidas por los Estados parte en virtud de tales tratados, no son expresamente abordados. Con ello, no hay realmente una *lex specialis* sobre este punto en los instrumentos de cooperación judicial internacional.

Esto se puede deber a dos razones. La primera es que al haber sido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados⁴ adoptada con anterioridad a todos los tratados de cooperación judicial internacional antes indicados, no se vio la necesidad de reiterar una regla sobre este punto. En otras palabras, se tomó como suficiente la solución ofrecida el artículo 63 de la Convención de Viena a la que haremos referencia más adelante.

² (I) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, adoptada en la CIDIP-I Ciudad de Panamá, 1975. La misma ha sido ratificada a la presente fecha por dieciocho países. Entre estos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 04 de octubre de 1984 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 22 del tratado, el 03 de noviembre de 1984. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/HqUBhi> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/gdSHYC> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (II) Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, adoptada en la CIDIP-I Ciudad de Panamá, 1975. La misma ha sido ratificada a la presente fecha por quince países. Entre estos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 16 de mayo de 1985 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 20 del tratado, el 15 de junio de 1985. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/2now8f> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/tf622c> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (III) Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, adoptado en la CIDIP-II Montevideo, 1979. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por quince países. Entre estos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 16 de octubre de 1991 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 9 del protocolo, el 15 de noviembre de 1991. Texto del protocolo consultado en: <https://acortar.link/ieCNcn> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del protocolo consultado en: <https://acortar.link/5NttvF> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (IV) Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, adoptada en la CIDIP-II Montevideo, 1979. La misma ha sido ratificada a la presente fecha por siete países entre los cuales no se encuentra Venezuela. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/MweuY8> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/jjBCe0> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (V) Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. La misma ha sido ratificada a la presente fecha por trece países. Entre esos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 16 de mayo de 1985 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 15 de la Convención, el 15 de junio de 1985. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/cuNEVT> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/xrMbVX> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). (VI) Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, adoptada en la CIDIP III La Paz, 1983. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por cinco países. Entre esos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 10 de agosto de 1993 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 20 del Protocolo, el 09 de septiembre de 1993. Texto del protocolo consultado en: <https://acortar.link/pRr6Lq> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus del protocolo consultado en: <https://acortar.link/lbTZkL> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025).

³ (I) Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, adoptado el 27 de junio de 1992. El mismo ha sido ratificado a la presente fecha por cuatro países. (II) Protocolo de Medidas Cautelares, adoptado el 16 de diciembre de 1994. El mismo ha sido ratificado por cuatro países. (III) Acuerdo Complementario al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, adoptado el 19 de junio de 1997. (IV) Acuerdo Complementario al Protocolo de Medidas Cautelares, adoptado el 15 de diciembre de 1997. (V) Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, adoptado el 05 de julio de 2002. (VI) Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, adoptado el 05 de julio de 2002. En virtud de la configuración particular del MERCOSUR este instrumento no entra en vigor automáticamente para sus estados miembros, sino que estos deben ratificarlo. Textos de los tratados y estatus consultados en: <https://acortar.link/Ns6t9h> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025).

⁴ Adoptada el 23 de mayo de 1969. Texto de la convención consultado en: <https://acortar.link/GBogIc> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025). Estatus de la convención consultado en: <https://acortar.link/5Fo00d> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025).

La segunda es que a partir del Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial se adoptó la figura de la autoridad central como “un órgano técnico jurídico administrativo que actúa como canal de análisis y tramitación directa de las solicitudes de asistencia jurídica internacional activas y pasivas que se libran en el marco de un tratado internacional”⁵. Esto puso a la figura de la autoridad central como el medio primordial para la transmisión y tramitación de las solicitudes de cooperación judicial internacional, relegando a la transmisión y tramitación por vía diplomática o consular a un segundo plano.

En todo caso, se aprecia que en los propios tratados específicos de cooperación judicial internacional por lo general no se ha previsto una solución a la cuestión de si la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares exime a los Estados de las obligaciones por ellos asumidas en virtud del tratado. Ello hace necesario entonces analizar la solución planteada por el artículo 63 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

II. La solución del artículo 63 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados es la primera codificación comprensiva del Derecho de los Tratados⁶. Es, como indican Kearny y Dalton⁷, un “tratado sobre tratados”, lo cual se evidencia claramente a partir del artículo 1 de la propia Convención: “La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados”⁸. Con ello, la Convención de Viena se plantea como un instrumento esencial en el desarrollo del Derecho de los Tratados, área que, a pesar de sus críticas, es de gran relevancia dentro del Derecho Internacional⁹.

En cuanto a la extensión de su aplicación, vemos que la Convención de Viena ha sido ratificada a la presente fecha por ciento dieciséis países que, por ende, se encuentran contractualmente obligados a aplicarlo. No obstante, hay que tener en consideración que muchas de las reglas de la Convención están basadas en la costumbre internacional, razón por la cual su

⁵ Rohr, Aldana, El rol de la autoridad central en la cooperación jurídica internacional en materia civil: una actriz fundamental para el acceso a la justicia transnacional y la formación de sus normas, en: *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, 2023, No. 26, p. 177. Disponible en: <https://acortar.link/2MvExW> (fecha de consulta: 02 de marzo de 2025).

⁶ Dörr, Oliver, Introduction: On the Role of Treaties in the Development of International Law, en: O. Dörr y K. Schmalenbach (Ed.), *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*. Berlín, Springer-Verlag GmbH Germany, 2018, p. 6.

⁷ Kearney, Richard D. y Dalton, Robert E., The Treaty on Treaties, en: *The American Journal of International Law*, 1970, Vol. 63, No. 3, pp. 495-561. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2199203> (fecha de consulta: 03 de marzo de 2025).

⁸ Villiger, Mark E., The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties – 40 Years After, en: *The Hague Academy Collected Courses Online / Recueil des cours de l'Académie de La Haye en ligne*, 2011, Vol. 344, p. 23.

⁹ “We need a law of treaties because international law is a system, with some claim to completeness; we need a law of treaties because treaties are a critically important part of that system; and we need a law of treaties because, when issues arise under treaties which the treaty itself doesn’t resolve, we have to have at our disposal the means for arriving at legally authoritative answers”. Ber- man, Sir Franklin: Why do we Need a Law of Treaties? Inaugural Lecture, en: *The Hague Academy Collected Courses Online / Recueil des cours de l'Académie de La Haye en ligne*, 2017, Vol. 385, p. 31.

fuerza vinculante como tal concierne a todos los Estados a pesar de que no hayan ratificado directamente la Convención¹⁰.

Establecidas estas ideas generales, vemos que el artículo 63 de la Convención de Viena aborda la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares y su efecto sobre los tratados. Este artículo indica lo siguiente:

Artículo 63. Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado¹¹.

Se ha indicado que este artículo, y específicamente su regla general, encarna los progresos logrados en las relaciones internacionales desde el siglo XIX¹². Históricamente una declaración de guerra automáticamente implicaba la ruptura o terminación de las relaciones diplomáticas o consulares y ponía fin a las relaciones derivadas de tratados internacionales para las partes en conflicto, “ya que la guerra significaba negociar por la fuerza y no por la diplomacia”¹³. En épocas posteriores los Estados comenzaron a hacer dependiente la terminación o suspensión de los tratados internacionales a la naturaleza misma del tratado, llegándose luego de la Segunda Guerra Mundial a la situación de que un conflicto armado no necesariamente llevaba al fin de las relaciones diplomáticas ni terminaba o suspendía *ipso facto* las obligaciones derivadas del tratado para las partes beligerantes¹⁴.

Es por lo que se afirma que esta norma, al igual que el artículo 74¹⁵ con el que está cercanamente relacionada, busca separar la cuestión política de las relaciones diplomáticas o consulares de las cuestiones jurídicas relacionadas con las obligaciones convencionales derivadas de un tratado internacional¹⁶, a la vez que busca evitar que los Estados usen la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares como un pretexto para evadir tales obligaciones¹⁷. Esta es la postura que por ejemplo tomó el tribunal arbitral del caso *Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) v. Republic of Burundi*¹⁸. De tal manera, el

¹⁰ Villiger, *The 1969 Vienna Convention...*, ob. cit., p. 23.

¹¹ Una norma similar se encuentra en el artículo 63 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales: “Artículo 63. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados parte en un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre esos Estados por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado”. Este tratado ha sido ratificado a la fecha por cuarenta y cinco países entre los cuales no se encuentra Venezuela. Texto del tratado consultado en: <https://acortar.link/OG4aWj> (fecha de consulta: 06 de marzo de 2025). Estatus del tratado consultado en: <https://acortar.link/KZqPWm> (fecha de consulta: 06 de marzo de 2025).

¹² Giegerich, Thomas, Article 63. Severance of diplomatic or consular relations, en: O. Dörr y K. Schmalenbach (Ed.), *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, Berlin, Springer-Verlag GmbH Germany, 2018, p. 1188.

¹³ Villiger, Mark E., *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 784.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ “Artículo 74. Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados. La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no impedirá la celebración de tratados entre dichos Estados. Tal celebración por sí misma no prejuzgará acerca de la situación de las relaciones diplomáticas o consulares”.

¹⁶ Giegerich, Article 63..., ob. cit., p. 1183.

¹⁷ Angelet, Nicolas, Article 63 Convention of 1963, en: O. Corten y P. Klein (Eds.), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2011, Vol. II, p. 1438.

¹⁸ *Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) v. Republic of Burundi*, Laudo del 04 de marzo de 1991. Consultado en: E. Lauterpacht y C. J. Greenwood (eds.), *International Law Reports*, 1994, Vol. 96, Cambridge, Cambridge University, pp. 279-333.

artículo 63 de la Convención de Viena constituye una confirmación del principio *pacta sunt servanda* afirmado de forma general en el artículo 26 de la propia Convención¹⁹.

Respecto del artículo 63 de la Convención de Viena se indica que refleja una regla derivada de la costumbre internacional, dado que los desarrollos de las relaciones internacionales antes de la suscripción del tratado en 1969 habían llevado a entender que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares no terminaba los tratados entre las partes en conflicto ni excepcionaba las obligaciones derivadas de los tratados para tales países²⁰. En la misma línea se ha aseverado que tanto la regla como la excepción reflejada en el artículo 63 de la Convención de Viena, que explicaremos de seguida, es hoy parte de la costumbre internacional, encontrando aplicación en casos en donde los Estados involucrados ni siquiera son parte de este tratado, como por ejemplo ocurrió en el caso *Relativo al Personal Diplomático y Consular de los Estados Unidos en Teherán (Estados Unidos de América v. Irán)*²¹.

Centrándonos ahora en el funcionamiento de la norma bajo comentario, vemos que el artículo 63 de la Convención de Viena establece una regla con una consecuencia claramente establecida y, a su vez, una excepción a tal regla. La regla supone que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado. Esto claramente presupone que los países en cuestión hayan mantenido relaciones diplomáticas o consulares de forma regular hasta ese punto²². La ruptura de relaciones diplomáticas puede darse por mutuo consentimiento, pero también por actuación unilateral de alguno de los Estados como expresión de protesta política, como una sanción política contra el otro Estado o bien sirviendo como medio para implementar una decisión o recomendación de una organización internacional²³. La ruptura regularmente se verifica mediante notificación directa, aun cuando hay formas implícitas como el cierre de las misiones diplomáticas del Estado que rompe las relaciones, exigiendo al otro Estado que proceda a realizar lo mismo²⁴. El rompimiento de las

“Whilst it is true that the severance of diplomatic relations can also involve the breaking off of other links between the States concerned, such a consequence is by no means automatic and an examination of State practice reveals numerous cases of the severance of diplomatic relations without any further consequences for the other relations between the two parties, even where they were conducted by public agents. If the thesis of Burundi were accepted, the severance of diplomatic relations would result in the calling into question of numerous mixed commissions in which the States in question cooperated for the well-being of their nationals, concerning frontiers, rivers, commercial, financial and cultural affairs etc., which all have more or less pronounced “political connotations”. Such a thesis would be particularly destructive of rules governing relations between peoples which should not be subject to the type of misunderstandings which so often occur between Governments”. Ibidem, p. 307.

¹⁹ “Artículo 74. ‘Pacta Sunt Servanda’. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Giegerich, Article 63..., ob. cit., p. 1183.

²⁰ Angelet, Article 63 Convention of 1963..., ob. cit., pp. 1439-1442; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention..., ob. cit., p. 789.

²¹ Decisión de la Corte Internacional de Justicia del 24 de mayo de 1980. En este caso se afirmó que la aplicabilidad del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares entre Estados Unidos e Irán permanecía inalterado a pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre tales países, aun cuando ciertamente su funcionamiento efectivo se vio perjudicado. “Furthermore, although the machinery for the effective operation of the 1955 Treaty has, no doubt, now been impaired by reason of diplomatic relations between the two countries having been broken off by the United States, its provisions remain part of the corpus of law applicable between the United States and Iran”. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), en: International Court of Justice, *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders* 1980, p. 28. Disponible en: <https://acortar.link/uolqvD> (fecha de consulta: 06 de marzo de 2025).

²² Giegerich, Thomas, Article 63..., ob. cit., p. 1188; Angelet, Article 63 Convention of 1963..., ob. cit., p. 1442; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention..., ob. cit., p. 786.

²³ Giegerich, Thomas, Article 63..., ob. cit., p. 1188.

²⁴ *Idem*.

relaciones diplomáticas o consulares efectivamente termina las comunicaciones directas entre los Estados²⁵.

En cuanto a la consecuencia de tal regla, vemos que el artículo 63 de la Convención de Viena indica que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares entre Estados parte de un tratado “no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado”. De ahí se entiende que, por sí misma, la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares no implica *ipso facto* una excusa para la inaplicación del tratado, ni una excepción a las obligaciones derivadas del mismo para los Estados involucrado en el cese de relaciones diplomáticas. Ambos Estados deben seguir aplicando el tratado de conformidad con el principio *pacta sunt servanda*. No importa la materia a la que se refiera o que sea bilateral o multilateral²⁶.

En lo relativo a la excepción a tal regla, la norma que comentamos expresa que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, “salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado”.

Aquí el adjetivo “indispensable” califica y limita la excepción, dado que se entiende que las relaciones diplomáticas o consulares deben ser absolutamente requeridas para que opere la misma, excluyéndose las situaciones en donde las relaciones diplomáticas o consulares sean deseables o útiles²⁷. Adicionalmente, cuando el artículo 63 de la Convención de Viena indica que la excepción operará en “la medida” en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado, lo que se ha interpretado es que “cuando la ruptura tiene el único efecto de hacer imposible el cumplimiento de una disposición específica del tratado, que puede separarse del resto a la luz del artículo 44 de la Convención, sólo esta disposición se verá afectada”²⁸.

Ahora bien, claramente el que las relaciones diplomáticas o consulares sean “indispensables” para la aplicación de un tratado determinado implica un análisis caso a caso²⁹. A todo evento, se entiende que los principios *pacta sunt servanda* y de la buena fe llevan a una interpretación restrictiva de esta excepción, así como implican que “las partes en un tratado deben agotar todos los medios razonables para superar los obstáculos que les impone su ruptura política y seguir cumpliendo el tratado”³⁰.

Finalmente, en cuanto a los comentarios generales del artículo 63 de la Convención de Viena apreciamos que no especifica las consecuencias de cómo afectará la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares a la aplicación del tratado cuando las condiciones de la excepción se cumplan. Angelet³¹, en virtud de ello, plantea dos posibles interpretaciones: (i) que los efectos de la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares realmente no están regulados por el artículo 63 de la Convención de Viena,

²⁵ Giegerich, Article 63..., ob. cit., p. 1188; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention..., ob. cit., p. 786.

²⁶ Giegerich, Article 63..., ob. cit., pp. 1190 y 1194; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention..., ob. cit., pp. 786-787.

²⁷ Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention..., ob. cit., p. 787.

²⁸ Angelet, Article 63 Convention of 1963..., ob. cit., p. 1446. Esto dependerá del tratado en concreto y de la disposición determinada, lo que deberá analizarse a la luz del artículo 44 de la Convención de Viena. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention..., ob. cit., p. 788.

²⁹ *Ibidem*, p. 1447.

³⁰ Giegerich, Article 63..., ob. cit., p. 1193.

³¹ Angelet, Article 63 Convention of 1963..., ob. cit., pp. 1444-1445.

sino por el artículo 61 *ejusdem*³²; o (ii) que los efectos de la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares están implícitamente determinados por el artículo 63 de la Convención de Viena y, en todo caso, se complementan con el Derecho consuetudinario o mediante la aplicación análoga del artículo 61 *ejusdem*. Por su parte Villiger, deja abiertas las opciones de suspensión o terminación del tratado, indicando que debe seguirse el procedimiento previsto en los artículos 65 a 68 de la Convención de Viena³³. Finalmente, Giegerich³⁴ argumenta que el cumplimiento de las condiciones de la excepción lleva solo a la suspensión del tratado, no a su terminación³⁵, pero que en todo caso tal efecto no es automático, sino que debe seguirse el procedimiento previsto en los artículos 65 a 68 de la Convención de Viena.

Concordamos con la opinión de Giegerich teniendo particularmente en cuenta que, como indica también este autor, la forma en que está construida la excepción busca que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares tenga el menor efecto posible sobre las relaciones derivadas del tratado³⁶.

III. El problema planteado a la luz del artículo 63 de la Convención de Viena

Consideramos que el artículo 63 de la Convención de Viena puede darnos luces para la solución del problema planteado en la introducción de este trabajo. Para llegar a su aplicación el juez que decida la apelación interpuesta por Alicia, dependiendo del sistema judicial en donde se encuentre inserto, podrá aplicar la Convención de Viena como tratado, dependiendo del lugar que dé su ordenamiento jurídico a este tipo de fuente, o bien podrá aplicar las normas que competan a la solución del asunto como parte de la costumbre internacional. En el sistema venezolano se puede plantear la cuestión de si el artículo 63 de la Convención de Viena tiene por objeto los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros, con el fin de que se pueda aplicar tal artículo como parte de las “normas de Derecho Internacional Público sobre la materia”³⁷. No obstante, al ser la aplicación de un tratado o, si se quiere, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, un asunto propiamente del Derecho Internacional Público, consideramos que no se puede obviar el carácter consuetudinario del artículo 63 de la Convención de Viena.

Ahora bien, considerando particularmente el problema vemos que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares no afecta las relaciones entre los Estados parte de un tratado sobre cooperación judicial internacional. Como hemos expresado *supra*, el medio primordial para la transmisión y tramitación de las solicitudes de cooperación judicial internacional es la vía de la autoridad central. En tal sentido,

³² “Artículo 61. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. 1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado. 2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado”.

³³ Villiger, *Commentary on the 1969 Vienna Convention...*, ob. cit., p. 788.

³⁴ Giegerich, Thomas, *Article 63...*, ob. cit., pp. 1195-1197.

³⁵ *Ibidem*, pp. 1195-1196.

³⁶ Giegerich, Thomas, *Article 63...*, ob. cit., p. 1196.

³⁷ Madrid Martínez, Claudia, Artículo 1. Ámbito de Aplicación de la Ley. Prelación de las Fuentes, en: B. de Maekelt, Tatiana; Esis Villaroel, Ivette y Resende, Carla (Coord.), *Ley de Derecho Internacional Privado Comentada*. Tomo I, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2005, pp. 154-158.

consideramos que para el funcionamiento de la autoridad central no es indispensable la existencia de relaciones diplomáticas o consulares. Si analizamos los tratados internacionales sobre cooperación judicial internacional se puede apreciar que la autoridad central se plantea como un canal directo de comunicación entre los Estados parte para la transmisión y tramitación de las solicitudes de cooperación judicial internacional. Tales instrumentos plantean entonces, en principio, que la comunicación entre los Estados parte debe ser de autoridad central a autoridad central.

No obstante, debemos tener en consideración que en la práctica lo comentado en el párrafo anterior se enfrenta a dos retos de gran relevancia. El primero es que, en muchas ocasiones, la autoridad central forma parte del ministerio de relaciones exteriores o cancillería, el órgano encargado de dirigir las relaciones del Estado del que forma parte con el resto de los Estados de la comunidad internacional. Por tal razón, y tomando en cuenta que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares es una decisión del Ejecutivo, es muy probable que la autoridad central se vea compelida a seguir la directriz de no mantener ningún tipo de comunicación con el Estado con el que se han terminado los lazos diplomáticos o consulares. El segundo incide en que algunos Estados tienden a tener a las misiones diplomáticas o consulares como un intermediario en las comunicaciones con las autoridades centrales de otros países³⁸. En la práctica de esta segunda situación la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares se tomará, aun cuando no lo sea, como un obstáculo ineludible en la transmisión y tramitación de las solicitudes de cooperación judicial internacional.

Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta que la autoridad central no es la única vía para la transmisión de las solicitudes de cooperación judicial internacional. También se tienen las vías diplomática o consular, judicial, particular y postal, cada una sujeta a las declaraciones y reservas hechas por cada Estado al momento de ratificar el tratado en cuanto a su aceptación. Respecto de ellas, especialmente la judicial, la particular y la postal no tienen como requerimiento indispensable la existencia de relaciones diplomáticas o consulares.

La vía diplomática o consular tiene incluso ante la ruptura de relaciones una vía para continuar funcionando. Bajo el artículo 45.c de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas³⁹ y el artículo 27.1.c) de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares⁴⁰ el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para

³⁸ Es el caso de Venezuela. Rodríguez Reyes de Mezoa, Miriam: Medios de la Cooperación Judicial Internacional en los Casos de Mero Trámite, en: B. de Maekelt, Tatiana et al. (Coords.), *Derecho Procesal Civil Internacional. In memoriam Tatiana B. de Maekelt*, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, p. 379.

³⁹ Adoptada el 18 de abril de 1961. La misma ha sido ratificada a la presente fecha por ciento noventa y tres países. Entre esos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 16 de marzo de 1965 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 51.1 del tratado el 15 de abril de 1965. Texto de la Convención consultado en: <https://acortar.link/uXpoJR> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2025). Estatus de la Convención consultado en: <https://acortar.link/B9pPgd> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2025).

⁴⁰ Adoptada el 24 de abril de 1963. La misma ha sido ratificada a la presente fecha por ciento ochenta y dos países. Entre estos países se encuentra Venezuela que consignó su instrumento de ratificación el 27 de octubre de 1965 entrando en vigor, de conformidad con el artículo 77.1 de la Convención el 26 de noviembre de 1965. Texto de la Convención consultado en: <https://acortar.link/qVgsNW> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2025). Estatus de la Convención consultado en: <https://acortar.link/VC8uKY> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2025).

el Estado receptor que pudiese fungir como medio para la transmisión y tramitación de las solicitudes de cooperación judicial internacional por tal vía.

Finalmente, e incluso en el caso en que se repute como indispensable la existencia de relaciones diplomáticas o consulares, vemos que el Estado, para poder dar como suspendida la aplicación del tratado sobre cooperación judicial internacional, deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 65 a 68 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Conclusión

De todo lo anterior se deriva que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares tiene un rol muy limitado como excepción o excusa para la no transmisión ni tramitación de las solicitudes de cooperación judicial internacional, las cuales se incluyen dentro del deber de los Estados de cooperar⁴¹. Además de ello, los Estados deben tener en consideración que “[e]l fundamento y el fin último de la cooperación judicial internacional, así como su práctica, tiene como eje cardinal el individuo en la defensa de sus derechos, en especial, en su derecho a recibir la tutela judicial efectiva invocada”⁴². Con ello, se desea que los Estados comprendan y recuerden que la cooperación judicial internacional no se limita a una relación Estado-Estado, sino que se configura como una relación triangular en donde un individuo no solo tiene el interés sino la necesidad de que se ejecute el acto procesal a través del medio de cooperación judicial, razón por la cual “[l]a imposición de limitaciones a la obligación de cooperación interjurisdiccional se considerará como una violación al derecho de acceso a la justicia”⁴³. Esto incluye el uso de la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares como excepción o excusa para la no transmisión ni tramitación de solicitudes de cooperación judicial internacional cuando la existencia de tales relaciones no es condición indispensable para la ejecución de las mismas.

⁴¹ Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia (TRANSJUS), encabezado del artículo 4.1: “La cooperación interjurisdiccional constituye una obligación internacional de todo Estado, no solamente en a los efectos de realizar emplazamientos, notificaciones y audiencias, sino que el deber de cooperar se extiende a todos aquellos actos o medidas necesarios para la consecución de los fines del proceso, incluyendo la cooperación en el procesamiento y ejecución de medidas cautelares, así como en la identificación, conservación y producción de pruebas”. Consultados en: <https://acortar.link/HAtzen> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2025).

⁴² Rodríguez Reyes de Mezoa, Miriam, *La cooperación judicial internacional y la tutela judicial efectiva*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, 2014, p. 148.

⁴³ Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia (TRANSJUS), aparte primero del artículo 4.1.